

DEBATE

La otra cara de la transición

NICOLÁS REDONDO: LUCHA SINDICAL EN TIEMPOS CRÍTICOS*

Albert Recio

Universidad Autónoma de Barcelona

La reciente publicación de los *Escritos y discursos, 1976-1994* de Nicolás Redondo por parte de la Unión General de Trabajadores, permite revisar las principales opiniones del que fue su secretario general en el período que va de la transición al post-franquismo hasta la reforma laboral de 1994. La importancia de la figura de Nicolás Redondo como referente de la clase obrera española, más allá incluso de su propia organización, está fuera de duda. Nadie con sensibilidad social puede minusvalorar su papel en la creación de una conciencia crítica, obrerista, igualitaria en un período en el que los aires neoliberales empezaban a hacer estragos. Su valor para enfrentarse a su propio partido en la defensa de intereses que consideraba socialmente más importantes. A su actitud, y a la de sus más íntimos colaboradores, le debemos agradecer la defensa de valores fundamentales para la clase trabajadora, en particular, y el conjunto de la sociedad, en general. Alguno de los mayores avances en cuestión de transferencias públicas se alcanzó con el empuje de la movilización que la UGT y CC.OO. consiguieron imponer con la Huelga General de 1988 y el

período subsiguiente de presión y propuesta social. La clase trabajadora le debe mucho al coraje, tesón y valor moral de personas como Nicolás Redondo en la defensa de derechos básicos. Resulta tan evidente que me permitiré darlo por sentado en el resto de mi reflexión.

A la hora de analizar el pensamiento y la acción de Nicolás Redondo, como el de cualquier otra persona, pueden adoptarse diversos puntos de vista. Aclarada mi admiración por su persona (impagable el tono sencillo con el que se dirigía a la población de a pie al presentar las propuestas sindicales, o su valentía al enfrentarse en un debate televisivo a un endiosado ministro de Economía), creo que resulta más útil realizar una revisión crítica de su trayectoria y la de la Unión General de Trabajadores, no tanto por ánimo de incordiar, como de plantear cuestiones que a mi modo de ver deben considerarse cuando se analiza la actual situación social y la manifiesta incapacidad de la izquierda, incluidos los sindicatos, para poner en marcha una estrategia que acabe con la pendiente hacia el desastre a la que nos está llevando el sistema dominante y las políticas neoliberales. En la medida que se trata de una aportación a un debate más amplio, creo que puede aceptarse que adopte un deter-

* N. Redondo, *Escritos y discursos, 1976-1994*, Unión General de Trabajadores, Madrid, 2002.

minado papel con el objetivo de situar puntos que considero relevantes.

Como hilo conductor de mi reflexión puedo ya adelantar que, en mi opinión, la política de la Unión General de Trabajadores y Nicolás Redondo, sus zigzagues y cambios, se explica por la contradicción que supone defender un determinado modelo sindical (y por tanto una concepción general del devenir social) en un período en el que sus premisas estaban siendo cuestionadas y abandonadas por los gestores políticos, teóricamente encargados de llevarlo a la práctica. Su principal valor fue enfrentarse a este giro, sus limitaciones las de no ser capaces de encontrar una línea superadora. Posiblemente aún hoy nadie la tiene, pero entretanto no se desarrolle, la acción sindical estará prisionera de una serie de contradicciones esenciales.

Esta trayectoria sindical puede dividirse a fines analíticos en tres fases. La primera abarcaría desde 1976 a 1984 y está centrada en los esfuerzos por consolidar la Unión General de Trabajadores, por una parte, y la política de pactos sociales, por otra. La segunda es un ciclo que se inicia en 1985 con el enfrentamiento por la reforma de la Seguridad Social, y termina en 1992 con la aprobación por parte del Gobierno del recorte de las prestaciones por desempleo. Es, sin duda, el período de mayor protagonismo sindical, no sólo por el éxito de la huelga de diciembre de 1988, sino también por la capacidad propositiva que generan los sindicatos y su actitud de exigencia de una política más orientada a objetivos sociales. El último período es el de 1992-1994, la última fase de Nicolás Redondo al frente de la UGT, un período en el que el sindicalismo es objeto de un enorme acoso político por quienes desde distintos espacios de poder presentan la nueva crisis del empleo como el resultado de las políticas sindicales y presionan por una remodelación de la re-

gulación laboral que acabará imponiéndose. Redondo y sus colaboradores padecieron el coste adicional del *affaire* PSV que, sospecho, paralizó el sindicato y abrió paso hacia otra lectura de la política sindical. Aunque breve, este período empezó a fijar lo que serían orientaciones básicas del sindicalismo en años posteriores, tanto en UGT como en CC.OO.

1. El período de la transición y los pactos sociales

En mi opinión, la actuación de la Unión General de Trabajadores en la fase inicial de la transición es más de desmovilización y fraccionamiento de la clase obrera que de consolidación de una conciencia de clase que trabajosamente se había asentado en los últimos años del régimen franquista. Posiblemente no se trataba de una opción consciente, pero sus efectos me parecen evidentes. En 1976, la burguesía española veía con bastante temor la radicalización creciente del movimiento obrero en los grandes centros fabriles, la extensión de prácticas asamblearias relativamente generalizadas y la posibilidad de que una organización de matriz comunista controlara todo este proceso. Una lectura de los medios de comunicación de la época permite reconocer que la existencia de varios sindicatos constituía una cuestión básica para la derecha democrática (en este sentido, la experiencia de la revolución portuguesa resultó para la derecha española una fuente de aprendizaje bastante importante). No quiero decir con ello que UGT se creó para este fin, pero sin duda obtuvo un margen de acción de esta situación. Realizar un Congreso en Madrid en 1976 exigía coraje, pero también una buena dosis de permisividad por parte del Gobierno, la cual no se daba en otros espacios de la lucha sindical, como lo indican la brutal represión de la huelga

de Vitoria, o el enorme despliegue policial ante las manifestaciones del 1 de mayo (Fraga de ministro del Interior) de este mismo año. El Acuerdo Marco Interconfederal de 1979 constituyó no sólo un acuerdo sobre salarios y condiciones de trabajo, sino también una oportunidad organizativa para la UGT que consiguió gracias al mismo situar cuadros sindicales en empresas en las que antes no tenía presencia (la propia debilidad organizativa del sindicato es patente en los escritos de este período y muestran cuán crucial era para sus dirigentes esta cuestión).

No trato de situar estas cuestiones con ánimo de incordiar, sino porque creo que constituyen una parte esencial de la historia, sin la cual se pierden piezas esenciales de la cuestión. No hay que ir a visiones conspirativas del proceso para entender por qué Nicolás Redondo adoptó unas políticas que a mi modo de ver no sólo estaban orientadas a dividir el mundo sindical y moderar sus demandas, sino que cuestionaban en gran medida las prácticas más participativas de la clase obrera del momento. Creo que ello se explica por la combinación de al menos dos factores clave: la voluntad de consolidación que toda organización tiene, y el marco estratégico en el que sitúa su intervención.

Del primer aspecto no hay mucho que decir. Cualquier organización humana tiende a autoorganizarse en función de la búsqueda de su propia reproducción y continuidad y, al menos en las sociedades capitalistas, este proceso se percibe en clave de crecimiento. Se trata sin duda de una cuestión habitual aunque no exenta de costes: a menudo los intereses de la propia organización, su supervivencia y consolidación, se anteponen a los intereses generales de la propia clase o movimiento, o meramente se traducen los proyectos colectivos en función de la lógica organizativa. Creo que éste es un proble-

ma general que los diversos modelos de organizaciones de izquierdas de todo tipo (partidos, sindicatos, grupos ecologistas, asociaciones de vecinos, etc.) no han conseguido resolver y ello es fuente de muchos problemas. UGT no escapó a esta lógica, máxime cuando en la transición era sin duda una organización menos implantada que su sindicato rival y éste era visto como una correa de transmisión de un partido que era la expresión organizada de una corriente con la que los socialistas habían experimentado una ruptura traumática, ruptura reforzada por la dinámica impuesta por la guerra fría. Se trataba, seguramente, de una cuestión que no admitía medias tintas: sólo consolidando un sindicato socialista era posible impedir la consolidación de una corriente comunista. La necesidad de consolidar el incipiente marco de libertades democráticas, y con ello la existencia misma de sindicatos, reforzaba aún más estas tendencias.

Lo curioso es, posiblemente, que en el «otro lado», en Comisiones Obreras, la lectura fue idéntica y reforzó las tendencias a consolidar un modelo organizativo-burocrático en detrimento de las formas de actuación más participativas.

La segunda cuestión es, sin embargo, más relevante. La acción sindical de UGT resultaba lógica dentro del marco de análisis de la social-democracia tradicional. Este análisis suponía la aceptación del capitalismo como núcleo de la vida económica. Pero un capitalismo que veía moderada su voracidad por la intervención pública que garantizaba que el crecimiento económico sostenido se tradujera en aumento del empleo y del bienestar social. En este esquema, los elementos centrales estaban, por un lado, en garantizar un crecimiento sólido (basado en la continua mejora tecnológica y en la formación de los trabajadores) y, por otro, en un sistema de instituciones públicas que velaran

por crear unas reglas del juego aceptables para los trabajadores, que promovieran servicios públicos universales y que introdujeran mecanismos de redistribución de la renta. Desde este enfoque estratégico, la moderación de la UGT en este período resulta bastante lógica, ya que por una parte se trata de permitir un nivel de rentabilidad capitalista capaz de generar un proceso de crecimiento sostenido (en un momento en el que la destrucción de empleo estaba haciendo estragos), y de otra permitir que esta moderación facilite el acceso del Partido Socialista Obrero Español, que es el único que, en su opinión, podía garantizar que se pusieran en marcha los mecanismos regulatorios y redistributivos a los que se aspiraba. Vista en perspectiva histórica, la apuesta de la Unión General de Trabajadores podía resultar lógica, puesto que simplemente pretendía aplicar en nuestro país un modelo que parecía haber tenido éxito en otros países europeos y que hacía compatible el progreso social con un reducido nivel de crispación. El problema estaba, en mi opinión, en que la confianza, sin duda bienintencionada, en este modelo no permitía considerar que el mismo estaba siendo cuestionado en todas partes y que un gobierno de izquierdas no iba a ser capaz de mantenerlo, al menos en el grado al que aspiraba Nicolás Redondo.

Para ser justos, no puede decirse que todos los errores estuvieran en el lado ugetista. Ya he comentado que la tentación organizativista-burocrática también estaba presente en Comisiones Obreras. Y una necesidad igualmente perentoria de recursos y militancia. Posiblemente tampoco allí se captaba con claridad cuáles eran los cambios de modelo que se avecinaban y a menudo el mayor radicalismo correspondía más a una cultura básica diferente que a un proyecto estratégico claro. Cuando la situación apretaba, como

tras el 23 de febrero de 1981, se acababa por firmar acuerdos como el Acuerdo Nacional de Empleo que supuso un importante retroceso social.

Aunque todo ello es agua pasada este período ha marcado en parte el futuro del mundo del trabajo. El mayor coste fue, a mi modo de ver, que se frenaron de golpe las incipientes experiencias de participación social que miles de trabajadores habían empezado a llevar a cabo en el período anterior. Al atacar el modelo de los comités de empresa, UGT no sólo estaba tratando de reforzarse como organización, estaba a la vez fomentando una cultura sindical donde la participación de las bases desempeñaba un papel secundario en beneficio de los representantes. No fue la única en propiciarlo, pero contribuyó a ello. No tiene sentido pensar contrafactualmente, pero es evidente que la insistencia en la consolidación de los aparatos sindicales ha ido en detrimento del desarrollo de una cultura participativa sin la cual es imposible consolidar un proceso social que haga frente a la ferocidad del actual modelo neoliberal. Su confianza en que la izquierda en el poder resolvería las demandas pendientes, tampoco contribuyó a generar una reflexión crítica con la que afrontar la dura experiencia de la gestión neoliberal.

2. El período de la ofensiva sindical

A partir de 1984 madura un cambio de posicionamiento, bien perceptible en las diferentes intervenciones de Nicolás Redondo en los debates de UGT y el PSOE. Las razones de esta maduración son claras. El sindicato ha aceptado con lealtad un duro ajuste industrial y salarial justificado por la situación crítica de la economía española, esperando que con la recuperación se relajará esta política y el Gobierno adoptará medidas reformistas más

ambiciosas. Lejos de esta perspectiva crece la percepción de que en el Gobierno predomina un enfoque socioliberal que mantiene una permanente demanda de contención salarial y plantea muchas propuestas que chocan con las demandas de la base sindical: la reforma de la Seguridad Social (1985) y el referéndum de la OTAN (1986) son dos cuestiones de grave confrontación. Más aún que la mera adopción de medidas impopulares, lo que preocupa a los líderes ugetistas es el tono con el que son considerados los sindicatos en las altas esferas del partido y el Gobierno: la visión creciente de los sindicatos como instituciones opuestas al progreso social, como grupos de presión a los que hay que limitar su espacio de acción. Todo ello unido a un insistente discurso sobre el fin de la clase trabajadora en un mundo post-industrial. Más allá del enfrentamiento concreto entre la alta dirección del PSOE y la UGT, creo que allí se encuentra uno de los dilemas cruciales de la transición: el abandono por parte de las clases medias profesionales de su alianza con la clase obrera. Esta pasó de ser considerada vanguardia de la transformación social a un grupo social en declive, conservador. Y este abandono tuvo lugar de formas diversas, como un enfrentamiento entre partido y sindicato en la familia socialista, con un éxodo masivo de militantes profesionales (bastantes emigrados al PSOE) hacia el comunismo ortodoxo y la izquierda radical (aunque en este último sector se ha mantenido un buen puñado de activistas en movimientos sociales, posiblemente sus posiciones resultan excesivamente radicales para generar una nueva alianza con el mundo sindical). De hecho es un proceso que posiblemente se ha dado en muchas partes, pero aquí fue especialmente dramático porque coincidió con un momento álgido de discurso antiobrero.

En esta coyuntura, el giro de Nicolás Redondo y la UGT fue sin duda crucial para generar una verdadera oposición a las políticas neoliberales. Parece claro que su actuación fue fundamental para restañar las heridas generadas por su enfrentamiento con CC.OO. y crear una dinámica unitaria que daría lugar a la enorme movilización social de diciembre de 1988 y a una capacidad de propuesta social bien expresada en la Propuesta Sindical Unitaria de 1990. Un trabajo que permitió recuperar una parte de la confianza en la acción autónoma de las clases trabajadoras y que consiguió imponer algunas importantes medidas de bienestar (mejora de las pensiones de jubilación y desempleo, introducción de las rentas de inserción, etc.). No fue suficiente, sin embargo, ni para cambiar la orientación básica de la política económica ni para hacer frente a los aspectos más hirientes del nuevo modelo laboral: en particular la extensión de los contratos temporales hasta niveles insospechados en el resto de países europeos.

Es evidente que del modesto avance de las demandas sindicales, a pesar de la impresionante huelga general de diciembre de 1988, no puede culparse en primera instancia a los sindicatos, sino a la enorme resistencia impuesta desde el Gobierno y desde los grandes grupos de poder económico. Muestra de ello es la feroz campaña realizada por la CEOE cuando el Gobierno, en un gesto amistoso hacia los sindicatos, aprobó el decreto que obligaba a informar acerca del tipo de contratos realizados a los representantes sindicales. A pesar de ser una medida poco eficaz para controlar los abusos de la contratación temporal, como posteriormente se ha visto, lo relevante es la enorme resistencia patronal a transigir con cualquier ampliación de los derechos de control sindical. Pero dicho esto creo que el planteamiento sindical del período contenía limi-

taciones que sin duda impedían abrir vías en la fortaleza neoliberal.

Aunque el tono había cambiado claramente y el discurso sindical se había reforzado, el esquema estratégico seguía en gran medida invariable, aceptación básica de la bondad del crecimiento económico y demanda de un Estado redistribuidor. Bien es verdad que se trata de una apuesta por el crecimiento económico basado en el aumento de la productividad, y por tanto orientado más a favorecer la eficiencia que no a rebajar los salarios y derechos sociales. Se trata de una estrategia que depende de dos cuestiones básicas: a) un gobierno implicado en tal estrategia, con una política orientada a promover tanto la eficiencia productiva como las políticas redistributivas; y b) un empresariado fundamentalmente comprometido en desarrollar un modelo de producción en el que la cooperación y la mejora de las condiciones laborales están asociadas a la producción de bienes tecnológicamente complejos, de alta calidad y capacidad de innovación. Ambas premisas estaban ausentes de nuestro panorama.

Una de las innovaciones cruciales del neoliberalismo es su cambio en el énfasis de los factores que determinan el éxito económico. Mientras en el modelo keynesiano tradicional es la demanda interna el motor del crecimiento (y en sus versiones más sofisticadas, la búsqueda de la innovación productiva), en el modelo neoliberal es la demanda exterior la que se percibe como factor determinante (así como la capacidad de un territorio para atraer capitales foráneos). Pero esta demanda exterior que debe tirar de la economía no necesariamente dependerá, al menos a corto plazo, de la búsqueda de la eficiencia, sino de que cada país en concreto adapte su producción a aquellas actividades en las que parece más eficiente. El esquema sugiere que en países con alta disponibilidad de

fuerza de trabajo y nivel medio-bajo de desarrollo tecnológico, lo mejor es especializarse en productos de bajo coste salarial y para ello es necesaria una política de contención de salarios. El proceso de apertura internacional y el miedo a la competencia exterior juegan como un telón de fondo sobre el que se legitiman estas políticas. De la misma forma que el control del gasto público, los impuestos moderados y una inflación domesticada se consideran los principales medios para atraer inversiones que generan empleos. Este esquema, ampliamente aceptado por muchos técnicos de alto nivel, coincidía además con los intereses y percepciones de una clase dominante que siempre ha dudado de la eficacia de la cooperación social, que ha estado acostumbrada a vivir en un mundo de bajos salarios, bajos impuestos y pocos derechos sociales y que, además, encontraba, y sigue encontrando, magníficas oportunidades de enriquecimiento en áreas relativamente tradicionales como la promoción inmobiliaria o el turismo. De hecho, una buena parte del cambio sectorial que experimentan las economías desarrolladas está orientado hacia la promoción de nuevos servicios privados dominados por empleos mal retribuidos (una situación que se legitima apelando a su baja productividad). Sin contar la presión ejercida por diversos organismos internacionales que resultan interlocutores habituales de los tecnócratas y políticos locales (Fondo Monetario Internacional, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Unión Europea, etc.).

Posibilitar una política económica de corte socialdemócrata como aspiraba UGT requería un cambio más radical que una mera presión al Gobierno. Hay indicios de que en algún momento los sindicatos pensaron en conseguir algún giro a la izquierda del PSOE o en una alianza con una Izquierda Unida orientada a ocu-

par un espacio socialdemócrata, pero resulta evidente que ni en una ni en otra organización hubo una mayoría dispuesta a adoptar esta opción. Reconstruir un proyecto alternativo era, y sigue siendo, una cuestión muy compleja en un mundo donde el neoliberalismo, en sus distintas versiones, se ha convertido en un proyecto hegemónico a escala mundial y crear una propuesta alternativa requiere un paciente proceso de reflexión, elaboración programática y movilización social. Un proceso que sin duda debe tener en cuenta cuestiones cruciales puestas en pie por nuevos movimientos sociales y que en muchos casos, particularmente en el de la ecología, tienen un encaje difícil con las propuestas sindicales basadas en el crecimiento económico como mecanismo básico para generar empleo y crecimiento salarial. Los tiempos de una reconstrucción de este tipo son bastante más largos que lo que demanda una acción sindical cotidiana. A todo ello hay que añadir el enorme arraigo que tiene en la cultura socialdemócrata la separación entre una organización para la acción política —el partido— y otra para la acción reivindicativa de los asalariados —el sindicato. Construir una nueva corriente de izquierdas a partir del movimiento sindical implicaba un salto conceptual que no parece que ni siquiera llegara a plantearse. Suponía un giro tan radical que sin duda hubiera generado tantas tensiones que posiblemente hubieran hecho estallar al sindicato mismo. Dadas estas coordenadas, la apuesta alternativa (desarrollo del Estado de Bienestar, profundización de los derechos laborales) de la UGT quedaba en terreno vacío, a la espera de que un cambio externo en el mundo político pudiera retomar una trayectoria que parecía perdida.

Creo que hay otra cuestión que empieza a gestarse en este período y que sin tomarla en consideración se pierden de

vista pistas importantes para entender lo que ha sido el sindicalismo español de los años noventa. En términos generales, es claro que la apuesta reivindicativa del equipo de Nicolás Redondo tuvo acierto en el campo de la movilización y sensibilización social, obtuvo alguna conquista importante en términos de ampliación de las coberturas sociales y fracasó en su intento de alterar la estrategia económica del Gobierno. Este fracaso generó a su vez una elevada tensión entre los dirigentes sindicales y los del Partido Socialista Obrero Español. Pero esta tensión encontró algunos puntos de fuga en lo que podríamos llamar un proceso de concertación fragmentada. Entiendo por ello un proceso en el que sindicatos y Gobierno negociaron por separado cuestiones diversas, con el objetivo de alcanzar acuerdos en aquellos campos donde era posible y aparcando aquellas cuestiones donde éstos eran imposibles. La ventaja de tal opción es que permite alcanzar algunos resultados. El coste es que se pierde una perspectiva general y se corre el riesgo de dejar fuera del ámbito de la negociación y la regulación cuestiones cruciales que afectan a la vida de la gente trabajadora (o, en definitiva, dejar que sea el Gobierno quien tome decisiones allí donde no tiene voluntad de negociar con los sindicatos). Cuando existen diferencias tan grandes en la concepción de la vida económica y laboral, cabe esperar que los mayores avances se produzcan en ámbitos relativamente marginales. Mientras se estancó una salida negociada al modelo de contratos de trabajo, se avanzó en particular en acuerdos en los que los sindicatos mayoritarios ganaban sobre todo presencia institucional, como es la constitución del Consejo Económico y Social y, más importante, la creación de la FORCEM que permitía a los sindicatos entrar a gestionar los fondos de la formación laboral. El sindicato ganó

con ello presencia institucional y aprendió que podía obtener algo, siempre que negociara en el espacio adecuado.

En definitiva, este segundo período es, sin duda, el que Nicolás Redondo adquiere mayor protagonismo social, apareciendo como portavoz de una crítica social a la deriva neoliberal del Gobierno de Felipe González, tratando de recuperar la presencia de la clase obrera española en el ámbito público. La defensa de valores básicos y la llamada a la movilización consiguió sin duda algunos éxitos importantes, pero fue insuficiente para quebrar una línea estratégica dominante y para desarrollar otra nueva, lo que exigía dolorosos y complejos cambios en la propia línea sindical. Posiblemente hubiera sido demasiado pedirle a un hombre como Nicolás Redondo, con una larga trayectoria en la cultura socialdemócrata, que hubiera sido capaz de liderarlo, máxime cuando a su alrededor tampoco existían muchos miembros que permitieran tejer esta izquierda a la que de alguna forma él apelaba.

3. El período de la ofensiva neoliberal

1992, este año que algunos pretenden mágico por las Olimpiadas y la Expo de Sevilla es, sin duda, un verdadero *turning point* de la vida laboral. El inicio de una profunda recesión económica y la voluntad de cumplir los acuerdos de Maastricht marcan el inicio de una ofensiva antiobrero y antisindical que señalará el último período de Nicolás Redondo al frente de la UGT. El inicio se encuentra en el «decretazo» de marzo de 1992 por el que se recortan sustancialmente las prestaciones de desempleo y se modifican algunas fórmulas de contratación temporal (parece que en nuestro país la regulación de las prestaciones por desempleo siempre se tiene que hacer «por decreto», sin posibilidad de llevar a cabo un amplio debate social) y cul-

mina con la reforma laboral de 1994, donde se legalizan las empresas de trabajo temporal y nuevas formas de contratación (los llamados contratos basura), se introducen mayores facilidades de despido y se amplían las potestades patronales en materia de movilidad interna. Todo ello en un clima público de «linchamiento» moral de los sindicatos y de las políticas regulacionistas que éstos defienden. El tono bastante agresivo de varias de las entrevistas a Nicolás Redondo en torno a la jornada de paro de junio de 1992 incluidas en el libro es buena muestra de ello.

Sin duda esta agresividad no es nueva (vale la pena repasar en una hemeroteca lo que se escribió antes de la huelga de 1988), lo nuevo fue la incapacidad sindical de generar en torno suyo un amplio movimiento social que permitiera una respuesta más contundente. De hecho, aunque importante, la respuesta al decretazo de 1992 fue un medio fracaso (para muchos la convocatoria de paro parcial constituyó en sí misma una fórmula de acción inadecuada pues en la práctica favoreció al esquirolaje) y la huelga general de 1994 si bien tuvo una respuesta masiva de la clase obrera industrial, no alcanzó un nivel parecido entre los sectores de asalariados públicos. En parte porque nunca entendieron que la reforma fuera nunca ellos, pero también porque antes no hubo un clima de preparación adecuado. Resulta por ejemplo relevante, en el volumen publicado, la casi nula presencia de artículos y reflexiones de Nicolás Redondo en el período anterior a la huelga de 1994, cuando se está gestando la reforma laboral más radical. Esta parquedad de comunicaciones creo que es bastante representativa de cómo encararon los sindicatos aquella cuestión: negociando con el Gobierno sin realizar un esfuerzo externo de debate social amplio (y hablo con conocimiento de causa: fui invitado en verano

de 1993 a una reunión de expertos en mercado laboral con CC.OO. y UGT, la reunión fue breve y salieron algunas ideas de trabajo para conseguir un amplio apoyo técnico a las posiciones sindicales, o cuando menos para forzar un debate en profundidad, pero ni aquella reunión tuvo continuidad ni se llevaron a cabo las propuestas que se habían planteado). De hecho, tras la huelga de enero, parece claro que se asume la derrota estratégica y se deja a la negociación colectiva sectorial y de empresa como espacio de intervención para amortiguar su efecto.

Este declive creciente de las posiciones sindicales, esta pérdida de capacidad de iniciativa se deben a motivos diferentes. La huelga de 1994 fue una actuación reactiva, más orientada a salvar la propia dignidad —que no es poco— que a impulsar una alternativa. Sin duda la crisis del empleo que se tragó un millón de puestos de trabajo (la mayoría fijos) constituía un telón de fondo crucial. Ante la ausencia de alternativas creíbles (y como recuerda el propio Nicolás Redondo, la crisis del mundo soviético ha ayudado a aumentar la creencia de que aquellas no existen), la creación de empleo es siempre un motivo que da mucho poder al capital privado, pues en el actual sistema social son los patronos los que tienen el poder de decidir cuándo y dónde se crean.

Sin duda también jugó la sensación de que había fracasado la posibilidad de alterar la orientación de la política económica mediante una confrontación con el Gobierno, de que era imposible generar otro escenario político a corto y medio plazo, más favorable a una política de corte socialdemócrata. Es posible que ello también coadyuvara el radical enfrentamiento entre el PSOE e Izquierda Unida que impedía pensar en un Gobierno más virado a la izquierda. Y sin duda empezaban a pesar las corrientes sindicales «realistas»

que comenzaban a experimentar las ventajas de la negociación fragmentada, que les permitía alcanzar algunos espacios de poder, y que tenía un miedo visceral a no ser capaces de alcanzar algún acuerdo negociado, por parcial que fuera. Las tendencias más conservadoras de los sindicatos se reforzaban tanto por el miedo al vacío de una negociación sin resultados como por la imposibilidad de alterar a corto plazo el panorama político general.

La última etapa de Nicolás Redondo al frente de la Unión General de Trabajadores está caracterizada por esta tensión entre la necesidad de dar respuesta a una agresiva política de contrarreformas de la regulación laboral y el fortalecimiento de una corriente subterránea más favorable a volver a un modelo de acción sindical más acotada que eluda un enfrentamiento continuado en el plano político y que permita ampliar los ámbitos de la negociación fragmentada. Esta contradicción explica, a mi modo de ver, el carácter desangelado, poco contundente y hasta cierto punto aislacionista (en el sentido de tender de nuevo a centrarse en la propia organización, renunciando a tejer un espacio más amplio de alianzas compartidas con otros sectores y movimientos) que de forma paulatina tuvo la acción sindical y que impidió fortalecer un sentimiento de clase que seguía presente en las movilizaciones convocadas.

Sin duda, el panorama en UGT no sería completo sin tener en cuenta el problema de la PSV. Se trató de un gravísimo error, más inexplicable cuando pocos años antes los poderosos sindicatos alemanes habían experimentado una situación parecida (el caso de la «Neue Heimat»), lo que debería haber alertado de los riesgos que se correrían con una operación de tamaño envergadura. No tengo la información suficiente para juzgar a fondo la cuestión. Pero, sin duda, ésta muestra que a veces las peque-

ñas cosas, y de hecho la política de vivienda era una cuestión complementaria de la acción sindical, pueden acabar teniendo mucha importancia y por esto hay que prestarles la atención que merecen. No hay duda de que el Gobierno y la derecha utilizaron agresivamente la cuestión para poner en la picota a unos dirigentes sindicales que con su honradez en la defensa de los intereses de los trabajadores les habían puesto en cuestión sus políticas (la misma reforma de 1994 estaba de hecho comprendida en una propuesta de «plan de flexibilidad» diseñada en 1986 en el Ministerio de Economía), pero en este terreno siempre vale tener en cuenta que el enemigo encontrará buenos argumentos en nuestros propios fallos. Y por esto hay que tratar de evitarlos.

El sindicalismo posterior a Nicolás Redondo ha sido en gran parte el resultado de los cambios ocurridos en este período. De una parte, la derrota que supusieron las dos contrarreformas de 1992 y 1994, que reforzó el convencimiento de que una línea de confrontación directa en un contexto desfavorable sólo conduce al fracaso. De otra, la experiencia de la negociación fragmentada que permite reforzar el papel del sindicato como interlocutor social y alcanzar espacios de gestión. La actitud sindical ante el ascenso del Partido Popular al poder se explica en buena medida por este aprendizaje: temor a que el Gobierno refuerce su talante derechista y procapitalista, y la posibilidad de alcanzar acuerdos en aspectos parciales que refuerzan la imagen de los sindicatos como organizaciones responsables y en el mejor de los casos introducen mejoras sociales reales. Esta estrategia funcionó un poco en el primer período del Gobierno Aznar, pero se ha ido evaporando en cuanto éste ha contado con mayoría absoluta y un contexto internacional que le permite actuar como el Gobierno derechista que es.

Es posible que los sindicatos vuelvan a verse presionados hasta posiciones límite, especialmente si, tras imponer el nuevo «decretazo», el Gobierno se anima a poner en marcha otras de sus ideas fuerza, como la desregulación de la negociación colectiva o nuevos recortes a la Seguridad Social. Lo que pase en el futuro es otra historia, pero lo que hoy son los sindicatos tiene en parte que ver con la dificultad de hallar una salida al reto impuesto por las políticas neoliberales. La no solución de aquellos problemas reaparece ahora con más fuerza y dramatismo.

Un comentario final

He tratado de discutir críticamente con el trabajo de Nicolás Redondo al frente de la UGT y, más allá, su influencia general sobre el movimiento sindical y la clase obrera en general. Quizás la nota suene a demasiado crítica aunque mi intención era introducir una reflexión sobre los límites y contradicciones de una determinada política sindical. No para elaborar inútiles contrafácticos, sino para tratar de entender los problemas del presente, sobre los que aún podemos intervenir.

Nicolás Redondo tiene para mí el mérito de haber sido fiel hasta el final a las concepciones de la vía socialdemócrata, en momentos que muchos abdicaban de la misma a menudo con argumentos poco sólidos o como conversos de al viejo catecismo liberal. Algo que sin duda muestra su valor moral y la profundidad de sus convicciones. Y el valor de mantener sus propuestas cuando su entorno entero estaba cambiando. Y el de defenderlas debiendo soportar no sólo la presión de sus adversarios, algo a lo que al fin y al cabo está avezado cualquiera que salta a la arena de la acción socio-política, sino especialmente la incompreensión y el rechazo de quienes habían sido por mucho tiempo

sus amigos y con los que, al menos en teoría, seguía manteniendo idénticas perspectivas de proyecto social. Posiblemente una actitud que no hubiera podido mantener si en la UGT de este período no hubieran participado un puñado de dirigentes que mantenían su misma línea. La credibilidad que emanaba de su figura constituyó un elemento concienciador y movilizador en sí mismo. La clase trabajadora española debe estarle agradecida por un empeño que permitió atenuar el rigor de algunas políticas neoliberales y alentó una conciencia social sin la que es imposible que alguna vez avancen otro tipo de políticas.

Pero, sin duda, también padeció la dificultad de defender propuestas socialdemócratas en una fase de la historia del capitalismo en la que esta vía ha sido abandonada y donde gran parte de las capas medias que nutren los aparatos políticos de la izquierda han sido abducidas por unos planteamientos económicos y sociales en los que no queda mucho espacio para las ideologías igualitarias que

han sustentado la acción sindical. Donde la nueva conciencia sobre viejos y nuevos problemas —los límites ecológicos al crecimiento, las raíces estructurales de la dominación femenina y su relación con la actividad productiva doméstica, el racismo que atraviesa las sociedades multiculturales de las grandes urbes globalizadas, etc.— apunta a soluciones que no pueden limitarse al tradicional reparto de los frutos del progreso que ha caracterizado a la cultura socialdemócrata y exige una refundación. Y donde la crisis de las formas tradicionales de participación democrática demanda una reformulación de las formas sociales de acción y organización. Y por ello, la comprensión de las limitaciones de su labor sindical nos debe seguir alentando en la búsqueda de propuestas que ayuden a superar la hegemonía neoliberal y a encontrar caminos por donde sea posible transitar en la dirección de la sociedad de personas libres y justas que siempre ha estado en el ideario de todo buen sindicalista.

NICOLÁS REDONDO. MÁS ALLÁ DE LA ACCIÓN SINDICAL

José Antonio Gimbernat

Los *Escritos y discursos, 1976-1994* de Nicolás Redondo, que se hallan ordenados cronológicamente, nos permiten reencontrar sin dificultades el hilo conductor de lo que ha sido su pensamiento y acción sobre todo como sindicalista, pero también como definitorio de sus actitudes cívicas y políticas. Existe una persistencia sin quiebras en sus convicciones. Por supuesto que la evolución y los vericuetos de la realidad política y social españolas le han obligado a modular sus reflexiones

e ideas y a tomar posiciones frente a violentas sacudidas y profundas decepciones, pero siempre están bien dibujadas las líneas maestras de lo que ha comprendido como el proyecto socialista.

Ya en los años de la transición a la democracia quedan bien definidos los objetivos de lo que va a ser su tarea principal al frente del sindicato de UGT. La acción de éste está concebida como autónoma de las instancias políticas, contra-distinta al quehacer político del PSOE. Pero simultá-